



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SAINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión Nº 35/02 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 7 de octubre de 2004, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual se aprueba el

CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR EL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN CUANTO A LA POSICIÓN DE ESTA COMISIÓN CON RESPECTO A LA POSIBLE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS EN CENTROS EMISORES POR MEDIO DE ASIGNACIÓN DIRECTA A RETEVISIÓN

(Expediente AEM 2004/1517)

I. ANTECEDENTES

El día 20 de septiembre de 2004 se recibió en esta Comisión escrito remitido por D. Luis Iturrioz Viñuela, Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias.

En dicho escrito se indica que:

«La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias va a proceder a iniciar las emisiones del tercer canal de televisión en su ámbito territorial. A fin de realizar estas emisiones hemos previsto contratar a un operador de infraestructuras los servicios de ubicación de quipos en los centros emisores. Dado que Retevisión es el único operador que dispone de una red completa de centros emisores de televisión en el Principado, ¿existe por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones algún inconveniente en que esta contratación se realice por asignación directa a esta compañía?»



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

II. OBJETO

La presente respuesta tiene por finalidad exponer la postura de esta Comisión acerca de la cuestión planteada por el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias.

Para ello, en primer lugar se muestra la doctrina de esta Comisión con respecto a la contratación administrativa de servicios de telecomunicaciones a partir de la normativa aplicable a la misma y la problemática identificada en estos mercados con carácter general (apartado IV).

En segundo lugar, se expone la situación regulatoria y de mercado en lo referente al servicio portador soporte del servicio de difusión de televisión en general, y en lo relativo al despliegue de sus centros emisores y reemisores en particular (apartado V).

Finalmente, se señalan las conclusiones que se derivan de la doctrina expuesta y la realidad jurídica y de mercado en cuanto a la consulta planteada por el Principado de Asturias (apartado VI).

III. HABILITACIÓN COMPETENCIAL

El presente Acuerdo se adopta al amparo de lo dispuesto en el artículo 48.3 h) de la Ley de 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que establece que la CMT tiene competencia para asesorar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, a petición de los órganos competentes de cada una de ellas, en relación con el ejercicio de competencias propias de dichas Administraciones Públicas que entren en relación con la competencia estatal en materia de telecomunicaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto *“el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos”*.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

IV. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

IV.1 La concurrencia entre operadores en la contratación administrativa de servicios de telecomunicaciones.

Esta Comisión ha venido resaltando cómo la normativa aplicable en materia de contratación administrativa de los servicios de telecomunicaciones impone el respeto a los principios de publicidad y concurrencia entre los distintos operadores¹.

En efecto, el respeto a las normas que, en el ámbito de la normativa sobre contratación administrativa, garantizan la publicidad y la concurrencia de licitadores, reviste una importancia esencial para el desarrollo del mercado de telecomunicaciones en unas condiciones de competencia, puesto que dan oportunidad a los operadores alternativos de presentar sus ofertas.

La legislación de contratos de las Administraciones Públicas prevé que el principio de igualdad y no discriminación habrá de respetarse en todo caso. El cauce propio para dar realización a dicho principio es el de la libre concurrencia de las empresas que quieran contratar con la Administración, lo que tiene por presupuesto la publicidad de la contratación a efectuar.

Las exigencias de publicidad y concurrencia, como garantías del principio de igualdad, han resultado reforzadas en el ordenamiento español por acción de la normativa comunitaria y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha defendido que la obligación de transparencia y no discriminación que incumbe a la Administración contratante permite abrir a la competencia el mercado de los servicios.

En el mismo sentido, por lo que respecta al ámbito nacional, también el Tribunal de Defensa de la Competencia ha destacado la relación que existe entre las normas que rigen la contratación pública y las finalidades de concurrencia. Así, en diversas resoluciones, de las que se hace eco la CMT en sus informes, el Tribunal de Defensa de la Competencia manifiesta que:

“Las normas de la competencia por lo tanto se aplican también a las Administraciones Públicas, no sólo cuando actúen como oferentes de bienes y servicios, sino también cuando actúen como demandantes de tales bienes y servicios” y que “en el ámbito de la contratación administrativa, la libre concurrencia entre los operadores económicos tiene como finalidad tanto la protección de los intereses económicos de la administración promoviendo la

¹ Puede consultarse la doctrina completa de esta Comisión al respecto en el Informe de esta Comisión al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la contratación administrativa de servicios de telecomunicaciones- Relación de Buenas Prácticas-, de 13 de febrero de 2003.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

máxima competencia posible, como garantizar la igualdad de los que reúnen los requisitos necesarios para acceder a aquélla”.

Con respecto a los casos en que, “por inercia” se contrata con la entidad que asumía, durante la época del monopolio, la prestación de los servicios objeto de contratación, esta Comisión ha puesto de relieve cómo el artículo 208 de la LCAP señala que la forma normal de adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia y de los contratos de servicios es el concurso².

Los supuestos en los que la legislación de contratos permite prescindir de tales principios tienen carácter excepcional, tal y como ha venido señalando esta Comisión³:

No obstante, la excepción que admiten tales principios de publicidad y concurrencia, la observancia de los principios de igualdad y no discriminación viene imperada en todo caso. Así lo prescribe el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones (LCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, precepto que está encuadrado en el Capítulo sobre “Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones públicas”. En el mencionado artículo se dispone lo siguiente:

“Los contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.”

En realidad, lo anterior es una exigencia del principio constitucional de igualdad (artículo 14). Asimismo, puesto que la contratación constituye un supuesto de actuación administrativa, es una exigencia del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española (a este respecto, vid Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2000 (RJ 2000\7976).”

En cuanto al procedimiento negociado, los artículos 209 y 210 de la LCAP regulan los supuestos en que este procedimiento puede utilizarse, dependiendo de si es con o sin publicidad. Cabe calificar a tales supuestos tasados como excepcionales.

² La subasta sólo puede utilizarse en contratos de escasa cuantía en los que su objeto esté perfectamente definido técnicamente y no sea posible introducir modificaciones de ninguna clase en el mismo, quedando el precio como único factor determinante de la adjudicación. No puede considerarse que ésta sea la situación normal de los contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, en los que la *calidad* y el *precio* son los factores determinantes de la adjudicación.

³ “Informe a la Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Xunta de Galicia sobre la aplicación de la oferta de precios mayoristas ADSL de Telefónica de España, S.A.U. a los servicios ADSL prestados por la Xunta de Galicia en centros públicos que impartirán ciclos de enseñanza obligatoria y en bibliotecas públicas municipales”, de 17 de enero de 2002.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ahora bien, la forma del concurso puede utilizarse en un procedimiento abierto, o en un procedimiento restringido. Como indica el artículo 73.3 de la LCAP en el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados expresamente por la Administración, previa solicitud de los mismos. La LCAP no contiene ninguna cautela frente a la utilización, por parte de la Administración, de este procedimiento, salvo la de exigencia de motivación que figura en el artículo 75.2 (*“En todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y forma utilizados”*).

Se ha observado, en algún caso, el recurso por parte de la Administración al procedimiento restringido, sobre la base de una supuesta falta de madurez del mercado de las telecomunicaciones. En concreto, por medio del procedimiento restringido, se pretendería limitar la presencia de operadores “sin vocación de permanencia”, o restringir las ofertas a operadores con “experiencia contrastada en el sector”.

A este respecto, esta Comisión ha venido señalando cómo a la luz de la normativa de telecomunicaciones razones como las aducidas no sirven para “justificar” (de acuerdo con lo previsto en el artículo 75.2 de la LCAP) el recurso al procedimiento restringido. La apreciación, por la Administración, de la “vocación de permanencia” de un operador no es un criterio objetivo que permita a dicha Administración discriminar (vulnerando los principios de la LGTel) entre los operadores que están habilitados para la prestación del servicio de que se trate.

Por todo ello, en el Informe de 17 de enero de 2002 se concluía con que:

“Es preciso resaltar ahora la relevancia que en el desarrollo del mercado de telecomunicaciones tiene la escrupulosa observancia por parte de las A.A.P.P. de los principios de publicidad y concurrencia en la contratación, principios éstos orientados precisamente a garantizar la igualdad de oportunidades entre los agentes del mercado cuando de la obtención de muy importantes clientes se trata. La adjudicación directa y sin publicidad de los contratos, además de su tratamiento a la luz de la legislación de contratos de las A.A.P.P., genera gravísimas distorsiones de la competencia que requieren de corrección con arreglo a la legislación sectorial de telecomunicaciones”.

De este modo, se ha venido señalando por parte de esta Comisión cómo los servicios de telecomunicaciones que, en un momento dado, necesite la Administración deberán ser objeto de contratación pública, lo que permitirá recibir ofertas de los distintos operadores del mercado. Se respetarán los principios de igualdad entre operadores y no discriminación, y demás requisitos de la contratación pública señalados anteriormente, sin que pueda influir en ello la circunstancia relativa a que el operador dominante viniera prestando el servicio con anterioridad.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

IV.2 Separación por lotes.

El Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, señala que, siempre que sea posible, habrán de establecerse lotes separados de aquellos servicios que por sus características lo permitan.

En esta línea se reconocen también las ventajas que implica para la Administración contar con una cierta separación en los servicios de telecomunicaciones objeto de contratación, lo que permite conseguir la oferta más ventajosa para cada servicio.

Por otra parte, el Real Decreto prevé que el pliego de cláusulas administrativas pueda admitir la presentación de ofertas integradoras de varios o de todos los lotes; de acuerdo con ello, alguna Administración ha previsto la valoración positiva de las ofertas integradoras, en particular cuando observa la posibilidad de beneficiarse de factores de escala.

Aunque el Real Decreto 541/2001 no resulta de aplicación a las Comunidades Autónomas ni a la Administración Local (y en particular, no resulta de aplicación la *exigencia* de lotes separados contenida en el Real Decreto), la separación por lotes es una posibilidad admitida por la normativa de contratación, con carácter general. En efecto, el artículo 68.3 de la LCAP señala que *“Cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto”*.

Por todo ello, esta Comisión ha venido recomendando que, en la medida de lo posible, se desglosen las necesidades de la Administración de manera que se proceda a realizar una contratación administrativa que permita la concurrencia de operadores capaces de prestar servicios concretos, incentivando así la competencia en beneficio de la propia Administración contratante. Todo ello se entiende sin perjuicio, como se ha comentado, de que se prevea la presentación de ofertas integradas que permitan aprovechar posibles economías de escala y/o alcance.

Existen otras medidas que esta Comisión ha propuesto a las Administraciones Públicas para el fomento de la competencia en el sector y la mejor satisfacción consiguiente de los intereses de las propias Administraciones Públicas convocantes. Dichas medidas, de las que se han destacado aquí las más importantes en lo que a la consulta planteada por el Principado de Asturias se refiere, están recogidas en el citado Informe de 13 de febrero de 2003.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

V. SITUACIÓN JURÍDICA Y DE MERCADO DEL SERVICIO PORTADOR SOPORTE DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN TELEVISIVA

V.1 Caracterización del servicio.

El *servicio soporte de los servicios de difusión de televisión*, puede definirse como aquel servicio de telecomunicaciones que tiene por finalidad el transporte unidireccional de las señales de los servicios de televisión, desde los centros de producción de las mismas hasta los medios de propagación por los que se difunden en condiciones apropiadas para que puedan ser captadas libremente por los usuarios. Así, podría definirse como el conjunto de actividades técnicas necesarias para poner a disposición del público determinados servicios vía ondas hertzianas terrenales.

Estas actividades engloban el transporte de las señales de difusión de televisión, entendido como comunicación punto a punto, utilizando fibra óptica, satélite, frecuencias radioeléctricas o cualquier combinación de tecnologías; y su difusión, punto a multipunto, en este último caso, por redes que hacen uso de específicas frecuencias radioeléctricas y hacia las que deben orientarse las antenas de recepción.

Consecuentemente, se identifica:

- i) el servicio de transporte, entendido como el transporte de las señales de difusión de televisión entre los centros de producción y los centros emisores, sobre redes de propósito general, de tipo punto a punto o punto-multipunto y
- ii) el servicio de difusión, que consiste en la entrega de señales de características conocidas y normalizadas por autoridad competente a un medio ubicuo y accesible al público en general, medio por el que se difunden. Desde este medio las señales pueden ser captadas a iniciativa propia del agente receptor e independiente del agente difusor mediante aparatos receptores apropiados para el medio de difusión, cuyas características se correspondan con las normalizadas para las señales. Estos aparatos receptores deben estar disponibles para el público en general sin limitaciones comerciales impuestas por el agente difusor. El medio de difusión más característico es la atmósfera terrestre y el espacio exterior a ella, pero de utilizarse otros medios físicos prácticamente ubicuos y al alcance del público en general pudiera considerarse también que puede haber difusión por ellos si las demás condiciones se cumplen. En otro caso no se tratará de servicios de difusión, sino de servicios de telecomunicaciones a cuyo través, eventualmente, se comercialicen otros servicios, contenidos, prestaciones o bienes.



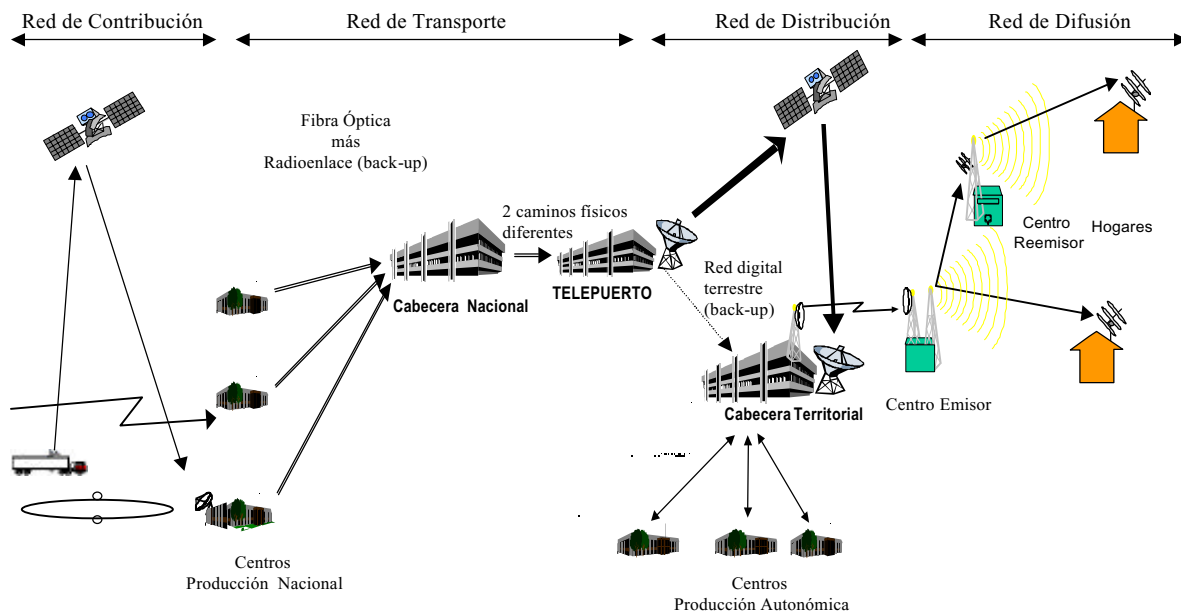
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La presente respuesta se ciñe al servicio portador soporte de difusión de televisión terrenal. No se consideran en la presente respuesta servicios portadores de otro tipo de señales audiovisuales como las de la televisión por cable o satélite, entendidas éstas cómo las que se distribuyen al usuario final (el espectador o abonado) a través del cable o de la antena satelital. Efectivamente, una vez que el operador de televisión se ha posicionado en el mercado minorista eligiendo un determinado medio de difusión de la señal (onda hertziana en el presente caso), los recursos que en el mercado mayorista necesita (servicio portador de la señal) vienen condicionados por dicha elección, y por tanto no resultan sustituibles con servicios portadores a través de otros medios distintos a las ondas hertzianas.

Dentro de lo que es el servicio portador de señales de televisión puede distinguirse entre contribución, transporte y difusión.

A título de ejemplo, se incluyen los siguientes esquemas de red (con y sin desconexiones territoriales, respectivamente):

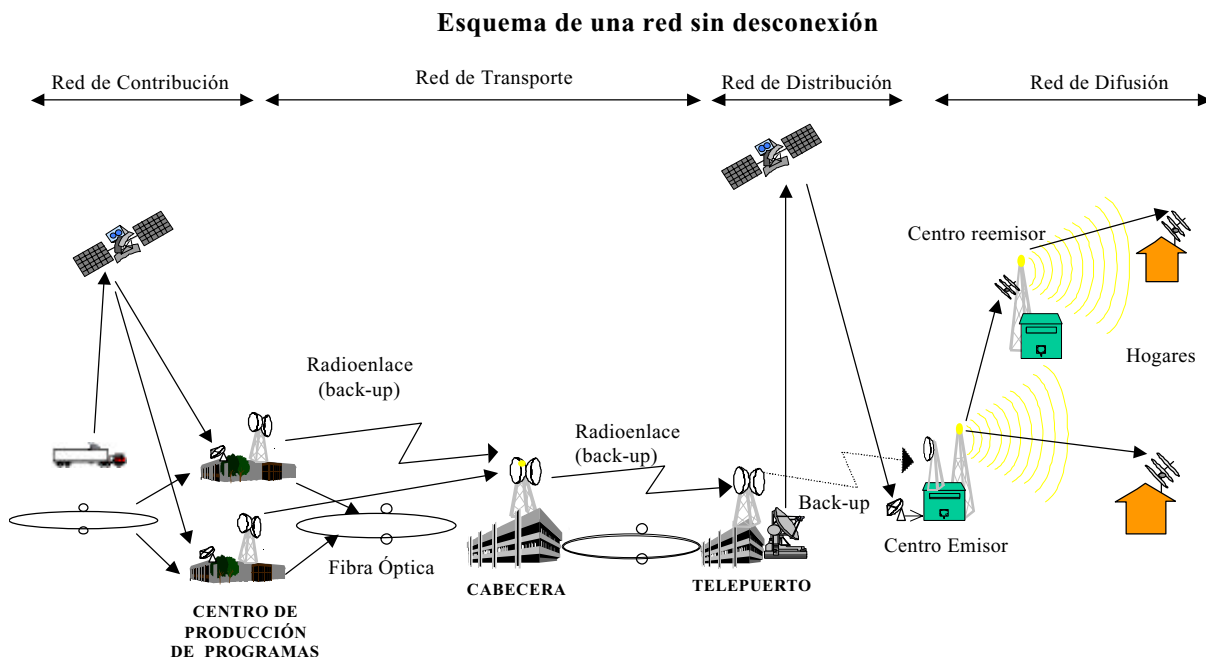
Esquema de una red con desconexiones





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El esquema es, a los efectos que aquí interesan, similar en el caso de una red que no permita desconexiones territoriales:



La definición de los distintos tramos de red mostrados sería la siguiente:

- **Red de Contribución:** Permite llevar señales de diferentes proveedores de contenidos o lugares en que estos tienen su origen hasta el Centro de Producción de Programas del cliente, vía enlaces por satélite, radioenlaces y tendidos de fibra óptica.
- **Red de Transporte :** Transporta las señales de los programas desde el Centro de Producción de Programas del cliente hasta el Telepuerto o Centro de Comunicaciones del operador, pudiendo utilizarse igualmente distintos medios de transmisión. A los efectos considerados en este informe el servicio de transporte incluye igualmente, por sus características técnicas y de infraestructura, la **Red de Distribución**, que es la que distribuye los contenidos generados en la Cabecera, desde el Telepuerto a los Centros Emisores vía redes de satélite y terrestre.
- **Red de Difusión:** garantiza la difusión de la señal a los receptores de usuario. Consta de Centros Emisores y Centros Reemisores.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

V.2 El servicio de ubicación de equipos en los centros emisores.

De este modo, se pone de manifiesto cómo desde el punto de vista técnico y de las infraestructuras necesarias, los servicios de contribución, transporte y difusión de la señal atienden, desde esta perspectiva, a demandas o finalidades diferentes al de difusión de dichas señales.

Además, las infraestructuras de red para la prestación de los servicios de contribución y de transporte no son específicas para la provisión de estos servicios y, en principio, pueden en gran parte ser utilizadas para cualesquiera de estos servicios portadores.

Y ello, sin perjuicio de que, desde la perspectiva del demandante que carezca de cualquier red y que requiera el servicio portador completo, los servicios de contribución y transporte puedan ser complementarios del servicio de difusión por cuanto que conjuntamente satisfacen una misma necesidad (llevar la señal producida por el difusor desde el centro de producción/programación hasta el espectador u oyente).

Atendiendo a la realidad del mercado, la práctica muestra cómo las formas de combinar dichos servicios portadores (de contribución/transporte y difusión) son variadas según el servicio (radio o televisión) y el ámbito territorial que se pretende cubrir.

En lo relativo al servicio de transporte, cabe señalar que la actividad de la contribución y el transporte hasta los centros emisores y remisores es susceptible de usar, en principio, cualquier red y tecnología como satélite o cable, propio o alquilado. Por tanto, la competencia potencial en la prestación de estos servicios es, en principio, elevada ya que cualquier red de telecomunicaciones podría ser susceptible de ser utilizada para ello.

Para la prestación de este servicio, por tanto, un operador puede instalar y explotar unas instalaciones e infraestructuras de red propias, o acudir al mercado de instalaciones e infraestructuras de telecomunicaciones y demandar capacidad de transporte de un punto a otro operador (que es lo que, en general, vienen realizando las cadenas de radio con red de difusión propia).

Así, cada uno de dichos servicios (transporte y contribución) pueden ser atendido, en el corto plazo, por los oferentes del otro. Esto es, cualquier operador de redes de telecomunicaciones con una cobertura suficiente podría ser un prestador potencial de los servicios de contribución y transporte, sin incurrir en costes significativos.

Para la prestación de los servicios de contribución y transporte de señales, un operador puede instalar y explotar unas instalaciones e infraestructuras de red



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

propias, o acudir al mercado de instalaciones e infraestructuras de telecomunicaciones y demandar capacidad de transporte a otro operador (que es lo que, en general, vienen realizando, por ejemplo, las cadenas de radio con red de difusión propia).

En cambio, no puede afirmarse lo mismo respecto de los servicios de difusión de señales, que exigen o implican, por la peculiaridad del servicio final de televisión al que contribuyen, el desarrollo de unas infraestructuras y redes específicas que permitan en una comunicación punto a multipunto para llegar a las antenas receptoras.

La difusión de señal propiamente dicha supone la explotación de infraestructuras y ubicaciones de redes primarias y secundarias, que conectan la red de transporte con el medio de propagación para la difusión de las señales. Efectivamente, la difusión propiamente dicha consiste en la explotación de las infraestructuras y ubicaciones de las redes primarias y secundarias que conectan la red de transporte con el usuario final a través del uso del espectro radioeléctrico. La red de difusión incluye ubicaciones físicas en cotas determinadas, mástiles soporte, alimentadores, transmisores y otros equipos. Las ubicaciones condicionan además la orientación de las antenas receptoras

Aunque la realidad del mercado demuestra que el grueso de los ingresos de los operadores presentes en este mercado se obtienen a través de la prestación del servicio de difusión de la señal a los correspondientes radiodifusores, nada impide que el prestador del servicio de difusión alquile su infraestructura a terceros (cadenas en autoprestación u otros prestadores de servicios de difusión). Este es precisamente el caso que parece plantear el Principado de Asturias en su carta.

La cuestión es, por tanto, tal y como la plantea el Principado de Asturias, si esta Comisión tiene algún inconveniente en que la contratación del servicio de ubicación de equipos se contrate directamente por el mismo a Retevisión, que sería el único operador que dispone de una red completa de centros emisores de televisión en el Principado.

V.3 Situación de la competencia en la prestación de los servicios de referencia.

En este sentido, conforme se ha adelantado, las infraestructuras consideradas necesarias para la prestación del servicio de ubicación de equipos para la difusión presenta, para el caso al menos de servicios de ámbito nacional o de una cobertura considerable, una difícil o imposible implantación en el corto plazo por operadores alternativos a los que ya están prestando el soporte a la difusión de señales, constituyendo verdaderos cuellos de botella.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Desde el año 1988, en que se crea el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, el servicio portador soporte de los servicios de difusión ha sido prestado por RETEVISIÓN I a la que se atribuyó la gestión y explotación exclusiva de la red pública de telecomunicación de transporte y difusión de señales de televisión.

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones liberalizó las telecomunicaciones incluyendo expresamente en su ámbito de aplicación las infraestructuras de red que se utilicen como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, tal y como se establece en el artículo 1.2 de la citada Ley. En consecuencia, el servicio portador soporte pasó a tener la consideración de servicio de interés general que se presta en régimen de competencia, regulado en la propia Ley que, no obstante lo anterior, estableció un régimen transitorio de prestación del servicio portador soporte del servicio público de televisión vigente hasta el 3 de abril de 2000, manteniendo el monopolio de RETEVISIÓN en la prestación del servicio hasta la fecha indicada.

En suma, el servicio portador soporte difusión televisiva ha sido liberalizado recientemente. Además, hasta la liberalización del servicio portador soporte de los servicios de radiodifusión de televisión, su prestación se efectuó en régimen de monopolio legal por RETEVISIÓN.

Respecto de la prestación conjunta de los servicios de transporte y difusión de la señal de televisión, debe indicarse en primer término que RETEVISIÓN I ha venido prestando, en régimen de monopolio legal hasta abril de 2000 y en el ámbito de un mercado liberalizado a partir de entonces, los servicios soporte de difusión de televisión analógica terrenal para los cinco canales de ámbito nacional existentes (dos de RTVE, Antena 3, Telecinco y Canal Plus). Además en el año 2000, RETEVISIÓN I comenzó a prestar servicio soporte de difusión de televisión digital terrenal a Quiero TV, en los que cesó en julio de 2002.

No existe en estos momentos ningún operador que preste este servicio a nivel nacional (es más, los cinco canales antes mencionado han renovado el contrato de prestación del servicio por un periodo de cinco años). La constitución de una red alternativa a la de RETEVISIÓN I con una cobertura similar (ver datos del apartado anterior) resulta prácticamente imposible a la vez que, probablemente, no viable económicamente, lo que configura una posición de dominio de RETEVISIÓN I a nivel nacional indiscutible.

A este respecto, por ejemplo, y según la información de que se dispone, RETEVISIÓN, para alcanzar una cobertura del 80% de la población en UHF se requieren únicamente 150 centros mientras que para alcanzar una cobertura superior al 95%, que es la que tiene RETEVISIÓN, se requieren más de 2.000 puntos. La cobertura marginal por encima del 80% de la población resulta



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

especialmente onerosa lo que dificulta que pueda existir en este mercado otro operador alternativo a RETEVISIÓN.

A nivel autonómico, existen diversos proveedores, en su mayoría de capital público, que prestan servicios a los canales de televisión autonómicos. Así, por ejemplo, Tradia presta servicio a la Corporació Catalana de Radio y Televisió (TV3 y Canal 33) en Cataluña, Retegal a la TVG en Galicia, el Gobierno Vasco a la ETB en el País Vasco y Axió-Red de Banda Ancha de Andalucía a Canal Sur en Andalucía. RETEVISIÓN I presta servicios de difusión de televisión analógica a Canal Nou (primer canal de la TVV) en la Comunidad Valenciana, Telemadrid en la Comunidad de Madrid y la Radio Televisión Canaria en la Comunidad Canaria. Por otro lado, RETEVISIÓN I también presta servicios de difusión de televisión digital al canal 1MUX de Madrid.

Así, se aprecia cómo existe una situación de cierta competencia actualmente en determinadas comunidades autónomas en la prestación de este servicio.

En el caso del Principado de Asturias, la demanda de ubicaciones para los equipos en los lugares que han de cubrirse para poder prestar el servicio de difusión televisiva solo puede ser satisfecha por redes de difusión que tengan en cuenta las peculiaridades de dicha zona (extensión, orografía, etc.), por lo que es difícil, si no imposible, observar una sustituibilidad, del lado de la demanda, con otras redes “externas” a esta zona geográfica.

En este sentido, los datos de que dispone esta Comisión en cuanto a las infraestructuras existentes para la difusión de televisión en el ámbito del Principado de Asturias muestra que, efectivamente, RETEVISIÓN es el único operador con una presencia significativa:

Tabla 1. Infraestructuras de RETEVISIÓN para la difusión de televisión en el ámbito del Principado de Asturias.

[CONFIDENCIAL]

A este respecto, cabe afirmar que la entrada en el mercado asturiano de operadores que no tuvieran ninguna presencia anteriormente en dicho mercado puede resultar difícil. Con todo, no puede descartarse el interés de algún operador alternativo en la prestación de estos servicios.

En este sentido, para prestar el servicio el operador debe conformar la red, y ésta no se constituye hasta que no se adjudican las concesiones y se firman los contratos por los cuales se cede el uso de las frecuencias que tiene asignadas el concesionario del servicio público de televisión terrestre.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En este sentido, la adjudicación sin licitación concurrente a RETEVISIÓN supondrá irremisiblemente la continuación en la situación actual. De hecho, la misma duración del contrato supondrá para los operadores entrantes una barrera dado que, como ocurre en los servicios de referencia, se tiende a fijar plazos largos por parte de los operadores ya establecidos con miras a disponer de tiempo suficiente para asegurar el retorno a sus inversiones. De esta manera, la firma de un contrato con un difusor impide por largo tiempo la entrada de otro operador de servicios de difusión, debido al escaso número de agentes demandantes. Sólo en el momento de la adjudicación puede surgir la competencia, que no será posible en modo alguno en la medida en que se realicen adjudicaciones directas al operador ya establecido.

Por otra parte, esta Comisión considera que es evidente que la entrada de la TDT (televisión digital terrestre) y en menor medida de la DAB (digital audio broadcasting), está impulsando el lanzamiento de nuevos servicios digitales tanto audiovisuales como de datos, por lo que la demanda de los servicios portadores tiende al alza a medida que se van incrementando los concesionarios, no sólo de ámbito nacional sino autonómico y local y cómo, con ello se apunta un progresivo interés en disponer de redes e infraestructuras asequibles en precio y prestaciones a las existentes (para analógico y para el digital)⁴. En este sentido, se ha puesto de manifiesto cómo la digitalización disminuye en parte las barreras a la entrada presentes en este mercado.

Tal y como se ha señalado, la posibilidad de separación por lotes -en función de zonas de cobertura geográfica, tipo de las emisiones (analógico/digital), etc- puede facilitar el concurso de operadores alternativos y permitir a la administración convocante el disfrute de los beneficios de la concurrencia.

⁴ Informe de 21 de junio de 2001.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

IV. CONCLUSIONES

1. La normativa aplicable en materia de contratación administrativa impone el respeto a los principios de publicidad, igualdad y concurrencia entre operadores.
2. En el caso del servicio de ubicación de equipos para la difusión de televisión en el ámbito del Principado de Asturias, RETEVISIÓN mantiene una posición de monopolio derivada de la situación regulatoria anterior a la liberalización de los servicios portadores soporte del servicio de difusión de televisión.
3. Las barreras a la entrada en la prestación del servicio de referencia son considerables. Sin embargo, la presencia de operadores con presencia a nivel local o de posibles entrantes interesados en introducirse a nivel autonómico en el Principado de Asturias ha de tenerse en cuenta.
4. La introducción de la tecnología digital en la prestación de los servicios de televisión y la posibilidad de desagregar la zona de cobertura en diferentes lotes pueden facilitar asimismo la concurrencia, beneficiando así a la Administración convocante de los beneficios de la competencia.
5. Por ello, esta Comisión estima que no debería dejarse de dar cumplimiento a los referidos principios de publicidad, igualdad y concurrencia entre operadores en la licitación propuesta.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Alfonso Ramos de Molins Sainz de Baranda
Carlos Bustelo García del Real